

## DESAFÍOS JURÍDICOS EN MIRAS A LA COP 21, PARÍS 2015

Boletín N° 4: Julio 2015

### 4.- En cuanto a Brasil, ¿qué nos puede comentar acerca de la legislación de cambio climático? ¿En qué etapa del proceso de definición de la contribución nacional se encuentra el país?

Desde 2009, Brasil cuenta con una ley de cambio climático que plasma el plan nacional para la implementación de los compromisos voluntarios asumidos en el contexto de la Conferencia de las partes de la CMNUCC de Copenhague realizada ese mismo año. Tenemos un marco institucional y jurídico, mecanismos de coordinación, y también la participación de la sociedad civil en un foro nacional de cambio climático.

Para el acuerdo de París, Brasil dio inicio a un proceso preparatorio desde hace un año, a través de una amplia consulta a la sociedad, conducida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Además, hay procesos de construcción de escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero cuyo objetivo es proyectar el impacto de las medidas de mitigación sobre el crecimiento del país, el empleo, y las condiciones sociales hasta 2030 y 2050. Estas iniciativas son lideradas por el gobierno, y cuentan con la

participación de la academia y de la sociedad civil, para que así el esfuerzo que Brasil lleve a París refleje todas sus visiones y capacidades.

### 5.- La ley de Brasil prevé un objetivo de reducción de emisiones de 36,1 a 38,9% para el año 2020 ¿Se está en condiciones de cumplir con esta meta?

La perspectiva es que lograremos llegar a ese objetivo antes del 2020, quizás en 2017 o 2018.

### 6.- ¿Se puede decir entonces que la actual Ley de Cambio Climático contribuirá a cumplir los nuevos desafíos de reducción de emisiones que asumirá Brasil?

En principio, la ley ha sido adecuada para cumplir con los objetivos que el país se propuso voluntariamente para 2020, aunque seguramente se deberán realizar algunos cambios o ajustes teniendo en cuenta las definiciones de la contribución nacional que estamos elaborando.

## Caso histórico del Tribunal de distrito de La Haya en materia de cambio climático



*Noémie Kugler,  
Estudiante del Programa de Doctorado  
de la Universidad  
de Aix-Marseille-(CR)2*

“¿Sería posible que los abogados y los jueces logren más en materia de cambio climático que los gobiernos que supuestamente representan a la población?”<sup>1</sup>, comentó Christine Ottery, editora adjunta de la línea “Energía” de Greenpeace, acerca del caso histórico en el cual fue ordenado a los Países Bajos reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la meta establecida a nivel europeo.

En dicho caso, la fundación “Urgenda” (contracción de “urgent agenda” en inglés) inició, en su nombre y en el nombre de otros individuos, una acción en contra de los Países Bajos, ante el Tribunal Civil de Primer Instancia del distrito de La Haya, destinada a obtener “la cesación de una práctica ilícita o dañosa”.

El demandante, “Urgenda”, funda su acción en diversos argumentos, dentro de los cuales destaca el actuar ilegal del Estado holandés, en razón de la no adopción de medidas de mitigación de gases de efecto invernadero suficientes, tal como es definido por el régimen

internacional y el consenso científico. Además, alega que, según los artículos 2 y 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos (CEDH), el Estado tiene una obligación positiva de protección. Finalmente, sostiene que está violando su “deber de diligencia”.

Por su parte, Holanda plantea que la demanda no sería admisible por no existir acciones ilegales de parte del Estado que afecten directamente a “Urgenda” y que ésta carecería de interés directo en el juicio, al fundar su acción en los derechos e intereses de las generaciones presentes y futuras de otros países. A su vez, niega que la política climática holandesa, que contiene medidas de mitigación y adaptación, vulnere el contenido de los artículos 2 y 8 de la CEDH. Finalmente, sostiene que -en caso de que el tribunal Holandés admita la demanda-, se atentaría contra el principio de la separación de los poderes del Estado.

En este contexto **la pregunta planteada al tribunal se refiere a la existencia o no de una obligación legal de reducción de gases de efecto invernadero del Estado holandés más estricta de lo establecido en el plan elaborado por su gobierno, respecto de Urgenda.**

En el fallo del 24 de junio de 2015<sup>2</sup> del Tribunal de Primer Instancia del Distrito de La Haya, se determina que, en efecto, el Estado holandés tiene la obligación de adoptar acciones de mitigación de gases de efecto invernadero que permitan alcanzar una meta de reducción de reducción de 25% al año 2020, en comparación con el nivel de 1990. Esta sentencia es histórica en el sentido que el juez, después de haber admitido la demanda de “Urgenda” (1), obliga al Estado a reducir sus emisiones de gases invernadero (2), precisando que su sentencia no afecta la separación de los poderes del Estado (3).

## DESAFÍOS JURÍDICOS EN MIRAS A LA COP 21, PARÍS 2015

Boletín Nº 4: Julio 2015

### La cuestión de la “admisibilidad” de la demanda

Un análisis sobre la cuestión de la admisibilidad de la demanda de “Urgenda” exige referirse previamente a la naturaleza de la acción presentada por la demandante, la fundación “Urgenda”, en su nombre y en el de 886 individuos<sup>3</sup>. De hecho, se ha planteado la interrogante respecto a si dicha acción corresponde a una acción de tipo colectiva o “class action”, integrada al marco normativo holandés desde 2005 en el código de procedimiento civil (artículos 1013-1018)<sup>4</sup>. Al respecto, cabe mencionar que dicho marco jurídico contempla varios procedimientos distintos para intentar una acción colectiva, dentro de los cuales se permite la representación por una o varias organizaciones, de un grupo de individuos, con un interés común, que buscan la protección de un derecho. En este contexto, existe una limitación en la causa a pedir, pues la reparación del daño queda excluida<sup>5</sup>. En el caso analizado, “Urgenda” representa a 886 individuos con el mismo interés: exigir a los Países Bajos la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto de una meta más exigente que la definida en la política nacional. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, sería posible concluir que la acción presentada por “Urgenda” corresponde a una “class action”. Sin embargo, el Tribunal del distrito reconoce interés en el juicio a “Urgenda” y no los individuos, en nombre de quienes ésta acciona, por no encontrarse suficientemente acreditados en la demanda el interés de estos últimos<sup>6</sup>.

En relación al interés de “Urgenda”, la sección 303a libro tercero del Código Civil holandés, exige en primer lugar que la acción presentada ante un tribunal civil represente intereses generales y colectivos. En segundo lugar, dicho cuerpo normativo señala la necesidad de realizar esfuerzos de diálogo con el demandante respecto de las temáticas que dan contenido a la demanda<sup>7</sup>. Al respecto, el tribunal concluye que los “intereses generales y colectivos” se encuentran definidos en los estatutos de “Urgenda”, dentro de los cuales es posible considerar intereses de carácter internacional e intergeneracional<sup>8</sup> y, que ésta demostró suficientes esfuerzos de diálogo con el Estado<sup>9</sup>.

En atención de lo antes expuesto, el Tribunal considera que “Urgenda” tiene un interés suficiente para intentar una acción ante el tribunal civil y declara admisible la demanda.

Superada esta etapa, se plantea la cuestión de fondo relativa a la violación por parte de los Países Bajos del deber de diligencia en materia de mitigación de gases de efecto invernadero (2).

### Orden a los Países Bajos de reducir los gases de efecto invernadero de acuerdo a la obligación de diligencia

En el marco del derecho holandés, las acciones u omisiones ilícitas están definidas como aquellas contrarias a las normas legales o, que sin serlo, violan el estándar de diligencia previsto en la ley. Al respecto, el Tribunal consideró que las obligaciones legales previstas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y otros instrumentos jurídicos de la Unión Europea relativos al cambio climático, como el Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH), entre otros<sup>10</sup>, no fueron vulnerados. Sin embargo, el Estado Holandés falló en su deber de diligencia. Sobre aquello, el Tribunal nos recuerda que, desde la perspectiva del derecho internacional, el



Fuente: <http://climatepositions.com/a-court-has-ordered-the-netherlands-to-reduce-carbon-emissions-by-25-within-five-years-in-the-worlds-first-climate-change-liability-suit/>

Estado está obligado por la CMNUCC, el Protocolo de Kioto y el principio de no causar daño, pero respecto de otros Estados y no de sus nacionales<sup>11</sup>. Pese a lo anterior, éste se sirve del marco jurídico internacional para interpretar la normativa nacional<sup>12</sup>. Así por ejemplo, se refiere al principio de precaución<sup>13</sup> y de equidad<sup>14</sup> para determinar el contenido del “deber de diligencia” del Estado. Esta metodología es particularmente relevante dado que el concepto mencionado es vago, particularmente en derecho internacional. Según el caso arbitral de 1941 “Trail smelter”, el estándar internacional del deber de diligencia se determina haciendo un balance de los intereses de las dos partes<sup>15</sup>.

Finalmente, el Tribunal concluye que el Estado tiene el deber de diligencia de adoptar las medidas de mitigación necesarias, pese a que la contribución de Holanda a las emisiones de gases de efecto invernadero sea irrelevante en términos globales<sup>16</sup>. En esta perspectiva, el Tribunal destaca que el vínculo de causalidad existente entre las emisiones de gases de efecto invernadero holandesas y los efectos del cambio climático (presentes y futuros) es fundamento suficiente para establecer tal “deber de diligencia”<sup>17</sup>, el cual debe responder al estándar que impone el conocimiento científico reciente y la política climática internacional que define las obligaciones de los países del Anexo I del PK<sup>18</sup>. En este orden de ideas, el tribunal resuelve que los Países Bajos deben reducir de 25% sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2020, en comparación con el nivel de 1990<sup>19</sup>.

Después de haber establecido la violación de la obligación de diligencia, y ordenar al Estado de reducir los gases de efecto invernadero, el juez precisa que su dictamen no va en contra de la separación de los poderes (3).

## DESAFÍOS JURÍDICOS EN MIRAS A LA COP 21, PARÍS 2015

Boletín N° 4: Julio 2015

### El debate sobre el respeto al principio de la separación de los poderes

Un debate muy interesante contenido en la sentencia en análisis, es el relativo a la eventual violación del principio de separación de poderes. La parte demandada sostiene al respecto que la admisibilidad de la demanda de "Urgenda" por parte del Tribunal atentaría contra el principio de la separación de poderes; sin embargo, el juez la justifica sobre la base de dos argumentos. El primero dice relación con la interpretación del derecho holandés a tal principio. A juicio del Tribunal, éste no debe entenderse en un sentido absoluto<sup>20</sup>, pues la distribución de los poderes busca el establecimiento de un equilibrio o balance entre ellos<sup>21</sup>, tal como lo indicó Montesquieu en su teoría, al sostener que no se trata de un aislamiento de los poderes, sino que de un equilibrio entre ellos y que, a pesar de la necesaria separación, una colaboración entre los mismos es necesaria.

El Tribunal aclara que el Estado holandés asumió compromisos internacionales que no puede desconocer. Pero hace notar que no se entromete en la política pública, pues no le ordena qué medidas legislativas o políticas públicas tiene que adoptar, ya que el Estado es libre determinar cómo cumple su compromiso<sup>22</sup>.

El segundo argumento se refiere a que si bien el juez no es elegido por el electorado, y por lo tanto no tiene legitimidad democrática<sup>23</sup>, su autoridad y poder se fundan en legislaciones democráticas ya establecidas –nacionales e internacionales – que le asigna el rol de resolver disputas legales<sup>24</sup>.

Conforme a lo antes expuesto el Tribunal de distrito concluye que la separación de los poderes no constituye una barrera al establecimiento de la sentencia<sup>25</sup>.

\*\*\*\*\*

Este fallo otorga interesantes elementos para el análisis sobre el rol del poder ejecutivo en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos en materia de mitigación de gases de efecto invernadero, pero sobre todo respecto de rol del poder judicial, en el resguardo del respeto de tales obligaciones y de la protección de los derechos de las personas que de ellas derivan. Sin embargo, no sabemos si el contenido de esta sentencia sobrevivirá a la apelación. Por el momento, los Países Bajos han preferido primero someter el asunto a un debate parlamentario en La Haya en septiembre<sup>26</sup>.

<sup>1</sup> Traducción personal del autor de la frase en inglés "Could it be that lawyers and judges will be able to achieve more for climate ambition than governments that are meant to represent people?"

<sup>2</sup> De Rechtspraak, <http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:7196> [consulta: 19 Junio 2015].

<sup>3</sup> Tribunal de distrito de La Haya, 24 de junio 2015, C/09/456689 / HA ZA 13-1396, § 2.4.

<sup>4</sup> British Institute of International and Comparative Law, [www.collectiveredress.org/collective-redress/reports/thenetherlands/legislation](http://www.collectiveredress.org/collective-redress/reports/thenetherlands/legislation) [consulta: 19 Junio 2015].

<sup>5</sup> Libralex, <http://www.libralex.com/fr/publications/class-action-in-europe-and-the-us> [consulta: 19 Junio 2015].

<sup>6</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.109.

<sup>7</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.4.

<sup>8</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.7 y 4.8.

<sup>9</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.9.

<sup>10</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.52.

<sup>11</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.42.

<sup>12</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.43.

<sup>13</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.58. "Con el principio de precaución, la CMNUCC expresa que tomar medidas no puede ser postergado hasta certeza científica completa". Traducción personal del autor de la siguiente sentencia "with the precautionary principle the UN Climate Change Convention expresses that taking measures cannot be delayed to await full scientific certainty".

<sup>14</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.57. "El principio de "equidad" significa que la política no debería solamente hacer lo que es más beneficioso para la generación actual, sino que también lo implica para las generaciones futuras, para que dichas generaciones no soporten exclusivamente y desproporcionadamente las consecuencias del cambio climático. Traducción personal del autor de

la siguiente sentencia "the principle of fairness means that the policy should not only start from what is most beneficial to the current generation at this moment, but also what this means for the future generations, so that future generations are not exclusively and disproportionately burdened with the consequences of climate change".

<sup>15</sup> Caso arbitral, 1941, Estados Unidos/Canadá, "Trail Smelter", RIAA, volume III, pp. 1905-1982.

<sup>16</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.83. Traducción personal del autor de la siguiente sentencia "due to the severity of the consequences of climate change and the great risk of hazardous climate change occurring – without mitigating measures – the court concludes that the State has a duty of care to take mitigation measures. The circumstance that the Dutch contribution to the present global greenhouse gas emissions is currently small does not affect this".

<sup>17</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.90.

<sup>18</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.84. Traducción personal del autor de la siguiente sentencia "it is an established fact that with the current emission reduction policy [...] the State does not meet the standard which according to the latest scientific knowledge and in the international climate policy is required for Annex I countries to meet the 2°C target".

<sup>19</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 5.1.

<sup>20</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.95.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Tribunal de distrito de La Haya, § 4.101.

<sup>23</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.97.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Tribunal de distrito de La Haya, Op. Cit., § 4.102.

<sup>26</sup> RTCC, [http://www.rtcc.org/2015/07/07/what-does-court-ruling-mean-for-dutch-climate-policy/?utm\\_source=Daily+Carbon+Briefing&utm\\_campaign=5e2c4e6023-cb\\_daily&utm\\_medium=email&utm\\_term=0\\_876aab4fd7-5e2c4e6023-303442461#sthash.M6fcvVWD.dpuf](http://www.rtcc.org/2015/07/07/what-does-court-ruling-mean-for-dutch-climate-policy/?utm_source=Daily+Carbon+Briefing&utm_campaign=5e2c4e6023-cb_daily&utm_medium=email&utm_term=0_876aab4fd7-5e2c4e6023-303442461#sthash.M6fcvVWD.dpuf) [consulta: 19 Junio 2015].

El equipo editorial del boletín Jurídico está compuesto por:

**Pilar Moraga**, Investigadora Principal de la línea Dimensión Humana del (CR)2

**Sol Meckievi**, asistente de investigación del (CR)2 ([www.cr2.cl](http://www.cr2.cl))

